

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 30 .- .-

**NOMENCLATURA** : 1. [40]Sentencia  
**JUZGADO** : 26° Juzgado Civil de Santiago  
**CAUSA ROL** : C-33588-2019  
**CARATULADO** : REYES/FISCO DE CHILE/CONSEJO DE DEFENSA  
**DEL ESTADO**

Santiago, cuatro de Abril de dos mil veintitrés

**VISTOS:**

Comparece don Boris Paredes Bustos, abogado, domiciliado en Pasaje Dr. Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, en nombre y representación de don **MIGUEL ANGEL SEGUNDO REYES VIVANCO**, cédula de identidad siete millones trescientos dos mil novecientos treinta y cuatro guión uno, óptico, domiciliado en Pasaje Maitén Nro. 1238, Población Francisco Infante, comuna de Renca, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado -en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado- por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en Santiago, Agustinas 1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, comuna de Santiago.

Funda su acción indicando en que los aciagos hechos descritos en este acápite han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile a través de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Si bien existe una clara vinculación de los hechos relatados, por el lugar en que se cometieron y, en algunos casos, por los hechores, además de una similitud en el tiempo, refiere de manera resumida, las torturas, vejaciones y otros tratos inhumanos y degradantes a los que fue sometido el demandante que represento por agentes del Estado y que constituyen el fundamento fáctico de esta demanda.

El actor con registro en la Comisión de Prisión Política y Tortura N° 20.400, nacido con fecha 25 de Junio de 1958, de actuales 61 años de edad. A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante del Mapu.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXEDZTPX

«RIT»

Foja: 1

Fue detenido el día 01 de Diciembre de 1984 en la vía pública en la esquina de calles Santa Rosa con Avenida Matta (en las inmediaciones del Hospital San Borja Arriarán) por agentes que circulaban en autos de civil sin identificación (después supo que se trata de miembros de Investigaciones y de la Central Nacional de Informaciones), quienes lo bajan del taxi en el que se encontraba. El operativo fue perpetrado por efectivos fuertemente armados, que a punta de culatazos y apuntándole con sus armas comenzaron a golpearlo, secuestrarlo y llevarlo a una bomba Copec ubicada en Avenida Matta hasta que terminó el “operativo” de la Policía de Investigaciones, donde sufrió incesantes golpes y siempre apuntado con mucha gente armada.

Añade que cuando terminó este operativo, se le trasladó encapuchado y tirado en el piso de un automóvil a unas oficinas, que después supo que era el Cuartel Central de Investigaciones en calle Teatinos con General Mackenna y comenzaron a interrogarlo. En un principio le interrogaron sus captores, quienes se identificaron, ya en el Cuartel, como la “Brigada Investigadora de Asaltos”, pertenecientes a Policía de Investigaciones de la época.

En este lugar, no solo siguieron los apremios físicos, sino que también los psicológicos, además de simulacros de matar a don Miguel Ángel con armas cortopunzantes, como también de dispararle y percutir pistolas en su cabeza, siempre con los ojos vendados o encapuchado, recibiendo, además, innumerables golpes en la oficina de interrogatorio como también en la “sala de tortura”. Esta sala de tortura se encontraba ubicada en un subterráneo y fue en este lugar donde le aplicaron a don Miguel corriente eléctrica en las sienes, pecho y genitales. Estas sesiones interminables de tortura se combinaban con la cruza de un palo entre los brazos o detrás de las rodillas, quedando, don Miguel Ángel, colgado como un cordero. Mientras estaba colgado, procedían a someterlo a ahogamiento y también a corriente eléctrica. En otro momento lo tiraban a la cama metálica, conocida como “parrilla”, amarrado de pies y manos, lugar donde le lanzaban agua



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX

«RIT»

Foja: 1

con un balde, para luego aplicarle corriente eléctrica. Sin un sentido claro del tiempo transcurrido, se sumaron luego los agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Mi mandante lo supo porque ellos se presentaron como tales, a cargo de un uniformado militar que dijo ser coronel. A partir de ese momento, ellos siempre estuvieron presentes en la tortura y durante los interrogatorios, avalando el accionar de los miembros de la “Brigada Investigadora de Asaltos”. Después de muchas e interminables sesiones de tortura con corriente, habiéndose negado don Miguel Ángel a responder las preguntas de sus torturadores, entró en un shock, el que se expresó a partir en convulsiones y fuertes tiritones (mientras tanto los agentes que le estaban torturando señalaban “entró en un Schok”, “este hueón se nos está yendo”).

Expresa que por lo anterior, don Miguel fue trasladado desmayado a la antigua Posta 3 ubicada en calle Chacabuco. Reconoció el lugar ya que despertó justo en el momento en que lo iban entrando en el auto. En dicho lugar, fue estabilizado por unos hombres vestidos de blanco, de los cuales don Miguel no tiene claridad si eran funcionarios del hospital o bien funcionarios de los organismos de seguridad. Aquellos entendieron que mi mandante estaba siendo torturado, pero no hicieron nada al respecto. Solo se remitieron a la reanimación, para que los organismos de seguridad prosiguieran con la tortura.

En resumen, don Miguel se mantuvo siempre vendado o con capucha. Recibió golpes de pies, puños y manos, simulacros de ejecución con pistolas y armas cortopunzantes en su sien, torturas con corriente, fue colgado, fue asfixiado, fue acostado en una cama de metal electrificada y fue objeto de tortura psicológica, en la que lo amenazaban con que iban a matar a toda su familia. Después don Miguel supo que, además, le habían allanado su casa.

Señala que don Miguel se mantuvo secuestrado en el Cuartel de Investigaciones a lo menos unos 10 días, donde también se le sacaba del cuartel a la calle en autos particulares para que reconociera a otros



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX

«RIT»

Foja: 1

de sus “cómplices”, instancia en la cual le mostraban fotos de personas para que las reconociera, momentos en los cuales los golpes y tortura psicológica se mantenían. Finalmente, don Miguel es acusado de robo con intimidación, dándose origen a la causa rol 2.008/84 de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago.- Con posterioridad a estos 10 días, fue ingresado a la Cárcel Pública, donde permanece privado de libertad hasta el mes de junio de 1986, fecha en la cual se decreta su libertad bajo fianza. Detenido en su domicilio en una segunda oportunidad en el mes de Mayo de 1987 por carabineros en el marco de la sentencia definitiva dictada en la causa rol 2.008-84 de la Segunda Fiscalía Militar. En este contexto, es ingresado a la Cárcel Pública, donde permanece hasta el mes de Febrero del año 1989, fecha en la que es trasladado a la Cárcel de San Miguel, quedando en libertad con fecha 17 de Mayo de 1989, siendo indultado por el Presidente Patricio Aylwin con fecha 13 de Marzo de 1990.

Indica que producto de las torturas sufridas, tanto físicas como psicológicas y de su detención, padece de dolores crónicos y calambres en los hombros y trastorno de estrés post traumático y depresión.- Por esto último, recibió tratamiento psicológico en CINTRAS.-

Los tormentos ya han sido descritos y no tiene sentido relatarlos nuevamente, por lo que queda claro que, como consecuencia directa de las torturas producidas a mi representado se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues aunque hayan transcurrido más de cuarenta años de lo sucedido la persona continúa con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fue sometido.

Previas referencias doctrinales, jurisprudenciales y citas legales, solicita tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del **FISCO DE CHILE**, representado, -en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado- por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, ya individualizados, acogerla a



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX

«RIT»

Foja: 1

tramitación, y -en definitiva- aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de \$ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) a don **MIGUEL ANGEL SEGUNDO REYES VIVANCO** más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que S.S. estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

Con fecha 17 de diciembre de 2019 se verificó la notificación de la demanda.

Con fecha 6 de enero de 2020 el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, contestó la demanda, solicitando su rechazo, fundado en primer lugar, en que la indemnización sería improcedente, dado que la demandante ya fue indemnizada, pues la Comisión Verdad y Reconciliación, también llamada Comisión Rettig, propuso una serie de propuestas de reparación, las que fueron recogidas por la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas, estableciendo los siguientes mecanismos: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas. Asimismo y por la ley ya referida, tiene derecho a gratuidad en las prestaciones médicas, entre otros; citando jurisprudencia de las Excma. Corte Suprema que avalaría ello como monto suficiente de indemnización, ya que los mecanismos de reparación buscan compensar los daños a fin de no volver a solicitar indemnización de perjuicios, razón por la que opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado las demandantes.

En subsidio, opuso la excepción de prescripción extintiva, señalando que conforme al relato efectuado por las demandantes, la detención ilegal y tortura que sufrió ocurrió en el mes de marzo de 1975, y que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX

«RIT»

Foja: 1

imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 17 de diciembre de 2019, la acción se encontraría prescrita, ya que ha transcurrido en exceso el plazo de 4 años, según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, opone similar excepción alegando lo establecido en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, ya que ha transcurrido en exceso el plazo de 5 años. Añade, que no existiendo norma expresa, corresponde aplicar el derecho común, siendo prescriptible la acción para perseguir la responsabilidad civil, debiendo establecerse expresamente su imprescriptibilidad, como excepción, lo que no estaría ni siquiera dispuesto en los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile.

En subsidio de las excepciones opuestas, afirma que el monto pretendido es excesivo, atendido que el daño moral no se puede cuantificar; y en subsidio de todo ello, al conceder la indemnización se debe considerar lo ya pagado.

Afirma que es improcedente el pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes deberían contabilizarse desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, y que mientras no exista tal fallo, no hay mora, por tanto, los intereses, también son improcedentes.

Concluye, pidiendo el rechazo de la demanda, con costas o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 11 de enero de 2020 se evacuó la réplica.

Con fecha 22 de enero de 2020 se evacuó la réplica.

Se recibió la causa a prueba y se citó a las partes a oír sentencia.

### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que don Miguel Angel Segundo Reyes Vivanco, deduce demanda ordinaria en juicio de hacienda en contra del Fisco de Chile, con el objeto que se le indemnicen los perjuicios ocasionados como víctima de actos represivos y, en consecuencia se



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX

«RIT»

Foja: 1

condene al demandado al pago a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de \$ 200.000.000 (doscientos millones de pesos) más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que S.S. estime ajustada a derecho y equidad y al mérito de autos; todo con costas.

**SEGUNDO:** Que la demandada contestó solicitando el rechazo de la demanda, con costas, y oponiendo las excepciones de reparación satisfactiva por ya haber sido indemnizada la demandante y prescripción de la acción.

**I. Algunas consideraciones preliminares.**

**TERCERO:** Que en materia de orden público internacional y según se desprende de lo dispuesto en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se entiende por ***norma de ius cogens*** “*norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internación de Estados en su conjunto que no admite acuerdo en contrario (...)*”.

Sobre el particular Regina Díaz Tolosa en su obra “Derecho internacional humanitario y el Derecho penal internacional Especial referencia a su aplicación en Chile” expresa: “*El ius cogens es fuente material del derecho internacional público, fundada en la necesidad de protección de los más esenciales bienes jurídicos de la humanidad, aquellos que permiten que la misma permanezca y no se extinga, a saber: la dignidad humana y la seguridad y paz internacionales*”. Y agrega: “*(...) El ius cogens desplaza en su aplicación a otras normas -internacionales o nacionales- que sean contrarias o anulen sus propósitos en razón de su materia (...) Se incorpora el ius cogens de manera automática a los derechos internos, pues el fundamento tras este tipo de normas coincide con los que cada Estado “civilizado” considera esenciales (...)*” Finalmente indica: “*La jurisprudencia internacional ha destacado que, tratándose de normas de ius cogens, los Estados se encuentran obligados al margen de todo vínculo convencional, por constituir principios de derecho internacional*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX

«RIT»

Foja: 1

*consuetudinario que no pueden ser transgredidos (...) la codificación de las normas de ius cogens -y ciertamente la de cualquier norma internacional- reporta la ventaja de evitar suspicacias respecto de la existencia de las normas, mientras al mismo tiempo dota de precisión su contenido y alcance, haciendo su aplicación práctica más efectiva. Lo importante es, desde un punto de vista teórico, tener claridad en cuanto a que el tratado no constituye o crea la norma de ius cogens, sino solo la asegura, garantiza y promueve”*

**CUARTO:** Que dentro de las mencionadas normas imperativas de general aplicación se encuentran aquellas que buscan sancionar y reparar los **crímenes más graves que atentan contra la integridad del ser humano**, los que conforme se expresa en el numeral 1 del artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (promulgado mediante Decreto N° 104 de 1 de agosto de 2009) son: a) el genocidio; b) los crímenes de lesa humanidad; c) los crímenes de guerra, y d) el crimen de agresión.

**QUINTO:** Que el artículo 7.1 de la mencionada norma internacional expresa que se entiende por **crimen de lesa humanidad** “*cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) desaparición forzada de personas; j) el*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX



«RIT»

Foja: 1

*crimen de apartheid; y k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”*

En particular, la tortura consiste en “*causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas*”

En el mismo sentido el artículo 1.1 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante resolución 39/46, de fecha 10 de diciembre de 1984 y promulgada por nuestro país mediante el Decreto N° 808 de 26 de noviembre de 1988 expresa: “*(...) se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (...)*”

**SEXTO:** Que finalmente viene al caso recordar que es deber de los órganos del Estado someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, según el mandato dispuesto en el artículo 6° de la Constitución Política de la República, dentro de las cuales se encuentran aquellas contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile y vigentes, al tenor de lo que expresa el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental y a los que se ha hecho referencia en los motivos que anteceden.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX

**II. En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizados la demandante.**

**SEPTIMO:** Que la parte demandada fundó la excepción de que se trata en que a través de los distintos mecanismos de reparación que se han establecido a contar del año 1990, el demandante ha recibido una serie de beneficios, por lo que su pretensión de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral se encontraría satisfecha. Conforme a los oficios emitidos por el Jefe Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social.

**OCTAVO:** Que no obstante lo indicado, cabe consignar que que los **programas administrativos de reparaciones** contenidos en la Leyes N° 19.123 y N° 19.980 no constituyen obstáculos para que el Estado cumpla con la obligación internacional de reparación integral del daño, recogido en el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos que en lo pertinente expresa: “(...) *se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada*”.

De lo dicho se concluye que la solicitud de indemnización de perjuicios por concepto de daño moral no es incompatible con las cantidades dinerarias que ha recibido y que eventualmente en el futuro recibirá el demandante en razón de los mencionados programas administrativos, desde el momento que la determinación de la existencia del daño, la procedencia de su resarcimiento y cuantificación es materia que debe calificarse en esta sede.

Por lo razonado, se desestimaré la excepción en cuestión, según se dirá en lo resolutivo.

**III. En lo relativo a la excepción de prescripción.**

**NOVENO:** Que el demandado ha opuesto la excepción que se revisará fundado en que la acción ejercida en autos se encontraría prescrita.



«RIT»

Foja: 1

En principio, por haber transcurrido en exceso el término de cuatro años que en materia extracontractual dispone el legislador o, en subsidio, el lapso de cinco años que el derecho común dispone al efecto.

El plazo lo computa desde la detención ilegal y actos de tortura que sufrió la demandante y la fecha de notificación de la demanda -aun considerando suspendido el plazo de prescripción durante el período de la dictadura militar- todo en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

**DECIMO:** Que resulta necesario consignar, como se dijo en los considerandos cuarto y quinto de la presente sentencia, que los hechos que motivan la acción indemnizatoria que se conoce en estos antecedentes ***emanan de actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad***, de modo que la imprescriptibilidad ha de extenderse a la acción civil indemnizatoria.

**DECIMO PRIMERO:** Que, en efecto, si bien los instrumentos internacionales de derechos humanos -Pacto de San José de Costa Rica; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; entre otros- no se encontraban vigentes a la época en que ocurrieron los hechos, lo que podría llevar a que no resulten aplicables; en materia de derecho internacional de derechos humanos y, como se dijo en el considerando tercero de la presente resolución, las normas sobre ius cogens son fuentes materiales de derecho internacional, no pudiendo desatenderse al ser imperativas y de general aplicación para toda la comunidad internacional y, en lo particular, respecto de todo aquello que deriva de la pesquisa y sanción de los autores de delitos contra la humanidad y la reparación de sus víctimas, lo que resultaría imposible de cumplir al restringir a una porción de tiempo el acceso a la justicia para obtener el debido resarcimiento.

**DECIMO SEGUNDO:** Que según se desprende de la *“Norma técnica para la atención en salud de personas afectadas por la*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX

*represión política ejercida por el Estado en el período 1973 – 1990 del Departamento de salud mental de la División de prevención y control de enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud*” los trastornos o daños que sufren las personas que fueron sujetos de actos de lesa humanidad surgen con posterioridad, trascendiendo incluso a sus familiares, lo que refuerza el hecho que no puede limitarse a un lapso el derecho de pedir al Estado ser reparados por los actos cometidos por agentes estatales en ejercicio de sus funciones.

Consecuente con lo dicho, el Relator sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación por Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Theo Van Boven, en 1993 señaló: *"está suficientemente probado que, para la mayoría de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el paso del tiempo no ha borrado las huellas, sino todo lo contrario, pues ha provocado un aumento del estrés postraumático que ha requerido todo tipo de ayuda y asistencia material, médica, psicológica y social durante mucho tiempo"* (Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH-ONU), Informe final presentado por el Relator Especial sobre el Derecho a la Restitución, Indemnización y Rehabilitación de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 de julio de 1993, párr. 135).

**DECIMO TERCERO:** Que establecido lo anterior, se rechazará la excepción de prescripción opuesta, según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y aquella alegada en subsidio, por lo consagrado en los artículos 2514 y 2515 del mismo cuerpo legal, según se dirá en lo resolutivo.

**IV. Respecto al fondo: indemnización de perjuicios en sede extracontractual.**

**DECIMO CUARTO:** Que corresponde determinar si en estos autos concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada, a partir de la determinación de



«RIT»

Foja: 1

la responsabilidad del Estado en la detención y torturas practicado a la demandante al margen de todo proceso legal, por agentes del Estado.

**DECIMO QUINTO:** Que para acreditar sus asertos, la parte demandante hizo valer de la siguiente prueba

A. DOCUMENTAL:

1. Copia de nómina de personas reconocidas como víctimas de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en el que figura registrado el actor.
2. Certificado psicológico social del actor, suscrito por doña Fresia Vargas Neira, psicóloga clínica y por don José Miguel Guzmán Rojas, director ejecutivo CINTRAS, en el que se concluye: *“Estamos informando de una persona que fue gravemente afectado en su salud física, metal, moral y social por agentes del Estado de Chile. Don **MIGUEL ANGEL SEGUNDO REYES VIVANCO**, sufre de un síndrome por estres post traumático complejo crónico. Además, presenta secuelas físicas crónicas. Sufrió de torturas extremas llevadas al extremo de la resistencia humana. La tortura es una experiencia traumática límite, que ha provocado consecuencias sistémicas. No es solamente una modalidad compleja de agresión, crueldad y denigración. Sus efectos desquiciantes se agravan precisamente porque son agentes del Estado o personas a su servicio quienes dañan en nombre de la patria. Dadas estas características, se puede afirmar que las condiciones de prisión política y tortura descritas violaron los derechos de estas personas, causándoles daño emocional, moral y material, que amerita un proceso de reparación integral. Para ello es preciso no solo reconocer la ocurrencia de los hechos en general y la responsabilidad del Estado en particular, sino identificar también a cada persona que fue víctima de sus agentes, estableciendo su derecho a una reparación justa y digna. Las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del estado afectan a los individuos, las familias y la comunidad en su conjunto. A fin de prevenirlas y de prestar apoyo a los sobrevivientes de tortura, es necesario comprender cabalmente esta compleja cuestión. Es fundamental que esa comprensión del problema se promueva y se refrende en el derecho internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales, así como en las orientaciones relativas a la reparación social, moral, jurídica, etc. establecidas en dicho ordenamiento internacional y nacional, una omisión en ese sentido puede muy probablemente profundizar el daño causado a esta persona”*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX

3. Documentos doctrinales

4. Informe de daño psicológico de la demandante emitido por doña Patricia Olea Castro, psicóloga, en el que se concluye: *“(...) El evaluado fue sometido a violencia psicológica grave: amenazas de dañar a su familia, simulacros de fusilamiento y vejámenes contra su persona y las de su familia. Si bien no se pesquiza sintomatología post traumática, hay presencia de dos criterios que llaman la atención:*

- *Reacciones disociativas expresadas en escenas retrospectivas en las que don Miguel siente y actúa como si se repitiera el hecho traumático cada vez que se expone a la posibilidad de ser controlado por la policía.*
- *También se aprecia una conducta de evitación y esfuerzos para evitar recordar eventos relacionados con su detención y tortura (...)*”

**DECIMO SEXTO:** Que conforme se acredita con el documento “nómina de personas reconocidas como víctimas” de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el actor tiene la calidad de víctima de violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado de Chile.

**DECIMO SEPTIMO:** Que según se desprende de los documentos singularizados en los numerales 2 y 4 del literal A del motivo décimo quinto de la presente sentencia, los hechos dejaron a la demandante secuelas psicológicas. Lo anterior debe valorarse conjuntamente con los demás instrumentos aportados al proceso, que otorgan contenido a ese daño, en cuanto a las especiales características que tiene y a los excepcionales efectos que provoca en quien lo sufre.

Si bien el daño moral, esto es, el sufrimiento, dolor, molestia, desgracia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona, el miedo, la angustia, la ansiedad, la vergüenza, la pena, ocasionado por el hecho de que se trate; pudo presumirse a partir de la gravedad de los hechos ilícitos y de sus circunstancias concomitantes, todo lo cual se tuvo por acreditado, los antecedentes aportados por la parte demandante permiten reafirmar su absoluta ocurrencia.



**DECIMO OCTAVO:** Que, como se dijo, los perjuicios o daños sufridos por la demandante son consecuencia del actuar de agentes del Estado de Chile, el que aparece como responsable directo de sus secuelas psicológicas.

**DECIMO NOVENO:** Que con lo dicho, se encuentra acreditada la procedencia de la indemnización de perjuicios que se demanda, a modo de reparación integral del daño, por lo que se accederá a aquélla por concepto de daño moral, según se dirá en lo resolutivo.

**VIGESIMO:** Que para la determinación del monto, se tendrá en especial consideración las circunstancias dañosas vividas por el actor y su magnitud.

**VIGESIMO PRIMERO:** Que en lo atinente a la alegación de la demandada referida a la improcedencia de reajustes e intereses, debe expresarse que los primeros permiten mantener el valor monetario en el tiempo, de modo que resultan procedentes, desde que se declara la existencia de la obligación, esto es, a partir que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada, habida consideración a que desde esa oportunidad la situación jurídica queda indefectiblemente establecida.

Por lo dicho, la suma fijada en lo resolutivo se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes que preceda al pago.

Que respecto del pago de intereses corrientes, éstos se devengarán desde que el deudor se constituya en mora.

Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 144, 160, 170, 254, 341, 342, 346, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 1437, 1698, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515; 5, 6, 7 y 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República de Chile; Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Convención Americana de Derechos Humanos; Convenios de Ginebra; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, **se declara:**



«RIT»

Foja: 1

I. Que se rechaza la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizada la demandante;

II. Que se rechaza la excepción de prescripción opuesta según lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil y aquella en subsidio, por lo consagrado en los artículos 2514 y 2515 del mismo cuerpo legal;

III. Que se acoge, sin costas, la demanda deducida y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a la demandante la suma de \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos) por concepto de daño moral, más reajustes e intereses según la determinación que se hizo en el considerando vigésimo primero de la presente sentencia.

**Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.**

**PRONUNCIADA POR DON RICARDO HUMBERTO CORTES CORTES, JUEZ TITULAR.**

**AUTORIZA DOÑA LORETO GREZ BECKER, SECRETARIA SUBROGANTE.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, cuatro de Abril de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXXXXEDZTPX